

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SALA DE ORALIDAD

Auto Interlocutorio

Radicación: 76001-33-33-016-2020-00037-01
Medio de control: EJECUTIVO
Demandante: MARIELA CAPOTE VALENCIA
(notificacionescali@giraldoabogados.com.co)
Demandado: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
(notificacionesjudiciales@cali.gov.co)
(angieca1480@hotmail.com)
Ministerio Público: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA
(procjudadm19@procuraduria.gov.co)

TEMA. APELACIÓN AUTO QUE DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS PÚBLICOS. INEXISTENCIA DEL DEBER DE IDENTIFICAR NUMÉRICAMENTE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SERÁN OBJETO DE EMBARGO. CONFIRMA AUTO APELADO.

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

1. La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto del 3 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado 16 Administrativo de Cali, que decretó el embargo y retención de dineros de cuentas bancarias a nombre del Distrito Especial, Turístico, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali (en adelante distrito Santiago de Cali) en Bancolombia.

ANTECEDENTES

2. Por conducto de apoderado judicial, Mariela Capote Valencia presentó demanda ejecutiva contra el distrito de Santiago de Cali, con el fin de obtener el pago de la sentencia del 22 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3. Por auto del 5 de marzo de 2020¹, el Juzgado 16 Administrativo de Cali libró mandamiento de pago contra el distrito de Santiago de Cali y a favor de la ejecutante.

¹ Folios 9-12 del archivo denominado «01ActaRepartoActuacionJuzgado» de la carpeta de primera instancia del expediente colgado en Samai (asociada a la anotación nro. 3).

4. En providencia del 3 de febrero de 2022², el juzgado decretó, como medida cautelar, el embargo y retención de dineros que el distrito de Santiago de Cali tuviera en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y CDT de Bancolombia, con la advertencia de que la medida se limitaba a la suma de \$ 14'000.000 y *«precisando que los dineros embargados proceden con las cuentas de ingresos corrientes de libre destinación o de propósito general, y además que no tengan el beneficio de inembargabilidad»*. Además, resolvió que *«si las cuentas que se pretenden embargar no corresponden a ingresos corrientes de libre destinación que puedan ser embargadas, por corresponder a dineros del Sistema General de Participaciones, debe abstenerse de embargar y retener dineros»*.

5. Para sustentar la decisión, la autoridad judicial expuso: **i)** que el numeral 10° del artículo 593 del Código General del Proceso autorizaba la medida cautelar de embargo y retención de dineros; **ii)** que, a pesar de que los recursos asignados a las entidades públicas tenían el carácter de inembargables, se estaba en presencia de una de las excepciones al principio de inembargabilidad, porque *«la obligación exigida contiene en una obligación clara expresa y actualmente exigible»*; **iii)** que no era procedente decretar la medida cautelar frente a todas diferentes entidades bancarias, como lo pidió la parte ejecutante, pues ello podría multiplicar los recursos embargados y afectaría injustificadamente el patrimonio de la entidad ejecutada; y **iv)** que, por ende, lo procedente era embargar únicamente las cuentas de una entidad bancaria, Bancolombia, con un límite de recursos a retener por valor de \$ 14'000.000 y con la advertencia de que *«la entidad financiera deberá tener en cuenta primero las cuentas con recursos destinados a las cuentas de ingresos corrientes de libre destinación o de propósito general»*.

6. La entidad ejecutada presentó recurso de apelación contra la providencia que decretó la medida cautelar de embargo y retención de dineros³. En primer lugar, indicó que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 715 de 2001, el pago de obligaciones laborales de docentes (naturaleza que tenía la obligación contenida en la sentencia base de ejecución) debe ser atendido con recursos de la participación de educación del Sistema General de Participaciones y, por ende, la autoridad judicial desconoció el principio de legalidad del gasto al disponer que se embargaran los recursos corrientes de libre destinación del distrito de Santiago de Cali. Por otra parte, adujo que si bien la sentencia C-1154 de 2008 estableció algunas excepciones al principio de inembargabilidad, lo cierto era que tales excepciones habían desaparecido o perdido vigencia, *«pues, en los numerales 1° y 4° del artículo 594 del CGP en concordancia con el parágrafo 2° del artículo 195 del CPACA no se contemplaron excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos y por el contrario de la literalidad de los preceptos fácil resulta inferir que no existen excepciones»*. Agregó que los recursos que reciben el distrito de Santiago de Cali hacen parte del Presupuesto General de la Nación y, por lo tanto, quedaban cobijados por el principio de inembargabilidad. Adicionalmente, sostuvo que el auto que decretó la medida cautelar no determinó el número de la cuenta bancaria sobre la que debía recaer la medida cautelar. Finalmente, alegó que la medida cautelar era improcedente porque era la Nación – Ministerio de Educación Nacional quien

² Archivo denominado «17DctaEmbargo» de la carpeta de primera instancia del expediente colgado en Samai (asociada a la anotación nro. 3).

³ Archivo denominado «18RecursoApelacionAutoMpioCali» de la carpeta de primera instancia del expediente colgado en Samai.

debía satisfacer el pago de la obligación impuesta en sentencia 22 de junio de 2015 (prima de servicios del personal docente), y no el distrito de Santiago de Cali.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

7. Esta Corporación es competente para conocer de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del CPACA. Además, según el ordinal h) del numeral 2° del artículo 125 de la Ley 1437 de 2011⁴, corresponde a la Sala dictar la providencia que resuelve la apelación contra el auto que decretó una medida cautelar.

2. Problema jurídico

8. A la Sala le corresponde determinar si debe confirmarse el auto recurrido, que decretó el embargo y retención de dineros de las cuentas bancarias que el distrito de Santiago de Cali tiene en Bancolombia y en las que maneja recursos de libre destinación o de propósito general, o si, por el contrario, como se alegó en la apelación, debió negarse la medida cautelar, porque: **i)** la obligación contenida en la sentencia base de recaudo debía ser satisfecha con recursos de la participación de educación del Sistema General de Participaciones, **ii)** los recursos están cobijados por el principio de inembargabilidad, **iii)** no se identificaron los productos financieros sobre los que iba a recaer el embargo y **iv)** quien debía satisfacer la obligación era la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

3. Solución del caso

9. Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala se referirá a: **i)** la procedencia de la medida cautelar de embargo y retención de dineros en los procesos ejecutivos, **ii)** el principio de inembargabilidad de recursos públicos y sus excepciones, **iii)** inexistencia del deber de identificar numéricamente las cuentas bancarias que serán objeto de embargo y **iv)** el caso concreto.

3.1. La procedencia de la medida cautelar de embargo y retención de dineros en los procesos ejecutivos

10. Es sabido que la Parte Segunda de Ley 1437 de 2011⁵ contiene un capítulo denominado «MEDIDAS CAUTELARES», pero esa regulación va dirigida únicamente a los procesos declarativos, y no a los procesos ejecutivos. En efecto, el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011, artículo introductorio de la regulación de

⁴ ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:

(...)

h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.

⁵ ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONAL Y CONSULTIVA.

medidas cautelares, incluye la expresión «*en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción*», es decir, delimita el ámbito de aplicación. Es más, la regulación sobre medidas cautelares está prevista en el capítulo X del título V (denominado «*demanda y proceso contencioso administrativo*»), mientras que el proceso ejecutivo está previsto en un título completamente aparte (Título IX).

11. Siendo así, ante la ausencia normativa de la Ley 1437 de 2011 en lo que atañe a medidas cautelares en el proceso ejecutivo, se hace necesaria la remisión a las normas del Código General del Proceso.

12. En ese sentido, el artículo 599 del Código General del Proceso establece, como medidas cautelares en el proceso ejecutivo, el embargo y secuestro de los bienes del ejecutado.

13. La medida de embargo está prevista en el artículo 593 del Código General Proceso, norma que menciona una serie de derechos/bienes susceptibles de ser embargados y, a su vez, indica la forma de efectuar el embargo.

14. En lo que nos interesa, el numeral 10° del artículo 593 dispone que «*el de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo*».

15. A partir de lo anterior, la Sala concluye que la medida de embargo y retención de dineros es una de las medidas cautelares que proceden en los procesos ejecutivos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3.2. El principio de inembargabilidad de recursos públicos y sus excepciones

16. En el ordenamiento jurídico colombiano hay normas que impiden el embargo de bienes y recursos públicos. El artículo 63 de la Constitución Política⁶ es la norma basilar que sustenta la inembargabilidad de los recursos del Estado. Esa norma constitucional enlistó determinados bienes que gozan de inembargabilidad y, además, reconoce ese fuero de inembargabilidad a aquellos bienes determinados por la ley.

17. Algunas normas que prohíben el embargo de bienes y recursos públicos son:

- El artículo 19 del Decreto 111 de 1996⁷: «*Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. No obstante la anterior inembargabilidad, los*

⁶ ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

⁷ El Decreto 111 de 1996 es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que compiló las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995. Por ende, las normas contenidas en el Decreto 111 de 1996 tienen fuerza material de ley.

funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política. Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta».

- Artículo 91 de la Ley 715 de 2001: «Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera».
- Parágrafo 2° del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011: «El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria».
- Parágrafo 2° de la Ley 1450 de 2011: «Los recursos que la Nación y las Entidades Territoriales destinen para financiar el régimen subsidiado en salud, son inembargables».
- Artículo 70 de la Ley 1530 de 2012: «Los recursos del Sistema General de Regalías son inembargables, así como las rentas incorporadas en el presupuesto del Sistema. Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en la presente ley, harán incurrir al funcionario judicial que la profiera en falta disciplinaria gravísima, sin perjuicio de la Responsabilidad Fiscal».
- Numeral 1° del artículo 594 del Código General del Proceso: «Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar (...) 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social».
- Artículo 25 de la Ley 1751 de 2015: «Los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente».

18. Sin embargo, la Corte Constitucional, desde muy temprano, advirtió que las normas que prohibían el embargo de bienes y recursos públicos no eran absolutas, pues debían armonizarse con otros principios, valores y derechos constitucionales.

19. Así, en la sentencia C-546 de 1992, la Corte Constitucional resolvió que la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación no operaba respecto de obligaciones laborales, cuyo pago no se haya podido obtener por la vía administrativa o judicial.

20. A su vez, en la sentencia C-103 de 1994, la corte precisó que las medidas de embargo y secuestro sobre las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación eran procedentes en los procesos ejecutivos contra las entidades públicas, en los términos del artículo 177 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo vigente para esa época), cuando el título ejecutivo fuera una sentencia judicial o un acto administrativo que incorporara una obligación clara, expresa y exigible. Esa regla fue reiterada en las sentencias C-354

de 1997 y C-402 de 1997, en las que, además, se dijo que el embargo de los recursos del presupuesto procedía, primeramente, sobre los dineros destinados al pago de sentencias y conciliaciones, si se estaba ejecutando un título de esa naturaleza.

21. En las sentencias C-793 de 2002 y C-566 de 2003, la Corte Constitucional examinó la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones⁸. En esas providencias, la Corte condicionó el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, *«bajo el entendido que los créditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educativo, salud y propósito general), bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo título, deben ser pagados mediante el procedimiento que señale la ley y que transcurrido el término para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin que puedan verse afectados con embargo los recursos de las demás participaciones»*.

22. Es decir, avaló el embargo de recursos del Sistema General de Participaciones, bajo las siguientes condiciones: **i)** las obligaciones reclamadas debían constar en sentencias judiciales o en actos administrativos que incorporaran una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad territorial; **ii)** la obligación contenida en el título ejecutivo debía tener como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del Sistema General de Participaciones (educación, salud y propósito general); **iii)** debía haber congruencia entre la fuente de la obligación y la partida a embargar, esto es, si la obligación surgió por actividades relacionadas con el sector educación, el embargo debía recaer sobre los recursos destinados a educación, mas no sobre aquellos destinados a salud o a agua o saneamiento básico, y **iv)** en todo caso, debía intentarse, primeramente, el embargo de los recursos destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se tratara de esos títulos ejecutivos.

23. En la sentencia C-1154 de 2008, la corte examinó la constitucionalidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008⁹ (con fuerza material de ley), que dispuso la inembargabilidad de recursos del Sistema General de Participaciones¹⁰ y estableció la posibilidad de adoptar medidas cautelares sobre ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales, cuando se trata de obligaciones laborales. En esa ocasión, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo *«en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de*

⁸ El Sistema General de Participaciones SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales - departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

⁹ ARTÍCULO 21. INEMBARGABILIDAD. Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.

¹⁰ Para ese momento, el Acto Legislativo 4 de 2007 había introducido unas modificaciones al Sistema General de Participaciones. En lo que interesa, las participaciones estaban destinados a los siguientes sectores: salud, educación, agua potable y saneamiento básico y propósito general. Es decir, se creó una partida específica para agua potable y saneamiento básico.

la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudir a los recursos de destinación específica».

24. Luego, en la sentencia C-543 de 2013, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del parágrafo 2° del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011; del artículo 70 de la Ley 1530 de 2012, y de los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.

25. Finalmente, en la sentencia C-313 de 2014, al examinar el artículo 25 de la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015), expuso que *«la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y, por ende, no tiene carácter absoluto, debiendo entonces atenderse al momento de la aplicación del precepto, lo sentado por la jurisprudencia en materia de excepciones al mandato que excluye respecto de los caudales de la salud la medida cautelar».*

26. En resumen, puede decirse que el principio de inembargabilidad opera de manera distinta, según se trate de recursos y rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación (principio de inembargabilidad presupuestal) o de recursos del Sistema General de Participaciones (inembargabilidad de recursos del Sistema General de Participaciones).

27. La inembargabilidad presupuestal cede ante obligaciones que provengan de una relación laboral, de una sentencia judicial o de cualquier otro título ejecutivo emanado por el Estado. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011 (parágrafo 2° del artículo 195), debe evitarse, en la mayor medida de lo posible, embargarse los recursos destinados al pago de sentencias y conciliaciones y los recursos del Fondo de Contingencias.

28. Entretanto, la inembargabilidad de recursos del Sistema General de Participaciones cede ante títulos ejecutivos (sentencias judiciales o actos administrativos que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles) contra entidades territoriales que tengan su fuente en actividades propias de los sectores destinatarios de esos recursos (educación, salud y agua potable y saneamiento básico), pero conservando la congruencia entre la actividad fuente de la obligación y el sector del recurso. Además, esos recursos podrán embargarse para garantizar el pago de obligaciones laborales reconocidas en una sentencia judicial, en caso de que los recursos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales no sean suficientes para atender el pago.

3.3. Inexistencia del deber de identificar numéricamente las cuentas bancarias que serán objeto de embargo

29. Es sabido que las cuentas bancarias, que fungen como depósito de dinero, están debidamente numeradas, con el fin de lograr la plena identificación e individualización de cada una de ellas, en tanto que es posible que un usuario financiero tenga varias en una misma entidad.

30. Tratándose de medidas cautelares de embargo y retención de dineros, podría pensarse que es válido exigir al ejecutante que identifique las cuentas bancarias

sobre las cuales deba recaer la medida cautelar, con miras a evitar el embargo indiscriminado de los productos financieros del ejecutado.

31. Sin embargo, el embargo indiscriminado de los productos financieros del ejecutado no constituye un problema en sí, toda vez que para ello esa modalidad de medida cautelar impone al juez el deber de limitarla a un valor determinado (que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un ciento 50%). Siendo así, una vez se logre el embargo y retención de dineros en ese monto, la entidad financiera no tendrá que afectar otros productos del ejecutado. Y, en el evento de tratarse de cuentas bancarias de diferentes entidades financieras, es el juez quien deberá informarle a las demás que ya se embargó el tope fijado, ordenando, si es del caso, el desembargo que se hubiere efectuado de más.

32. Adicionalmente, téngase en cuenta que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 14 de marzo de 2019¹¹, explicó que no era necesaria la identificación de las cuentas bancarias para acceder al decreto de la medida cautelar de embargo y retención de dineros, pues esa información no era de libre acceso para los ejecutantes.

33. Esa postura fue reiterada por esa misma subsección en providencia del 18 de marzo de 2022¹², en la que se dijo *«se individualizaron las entidades financieras en las que la parte ejecutada puede llegar a tener productos bancarios. Por ello, no le asiste razón a la parte apelante al considerar que para la procedencia del embargo de cuentas bancarias estas se deben especificar, pues no es una carga legal el que se deba tener conocimiento minucioso de la información de los productos financieros en los que se encuentran depositados los dineros de la parte ejecutada»*

34. Como se ve, basta que la parte ejecutante mencione las entidades financieras en las que la parte ejecutada puede llegar a tener productos bancarios.

3.4. Caso concreto

35. De conformidad con los acápites precedentes, la Sala confirmará el auto apelado, por las siguientes razones.

36. Los recursos del distrito de Santiago de Cali pueden ser de aquellos que hacen parte del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y recursos propios (que forman parte del presupuesto general de las entidades territoriales).

37. Si bien esos recursos están cobijados por el principio de inembargabilidad, lo cierto es que respecto de algunos de ellos opera la excepción de inembargabilidad.

38. En efecto, debe tenerse en cuenta que el principio de inembargabilidad presupuestal cede ante obligaciones que provengan de una relación laboral, de una sentencia judicial o de cualquier otro título ejecutivo emanado por el Estado. En ese sentido, es improcedente que la parte ejecutada invoque el principio de

¹¹ Expediente 20001-23-31-004-2009-00065-01 (59802).

¹² Expediente 63001-33-33-006-2020-00044-01 (67.769).

inembargabilidad presupuestal, pues se está ante una obligación que proviene de una sentencia judicial (providencia del 22 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca).

39. A su turno, el principio de inembargabilidad del Sistema General de Participaciones cede ante títulos ejecutivos (entre esos las sentencias judiciales) contra entidades territoriales que tengan su fuente en actividades propias de los sectores destinatarios de esos recursos (educación, salud y agua potable y saneamiento básico), pero conservando la congruencia entre la actividad fuente de la obligación y el sector del recurso.

40. Además, tratándose de obligaciones laborales reconocidas en una sentencia judicial (como en este caso, que se trata del pago de emolumentos correspondiente a prima de servicios), es posible acudir a los recursos del Sistema General de Participaciones en la partida del sector educación, pero únicamente en caso de que los recursos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales no sean suficientes para atender el pago.

41. En ese sentido, sí es procedente que la medida cautelar afecte primeramente los recursos corrientes de libre destinación del distrito de Santiago de Cali, como lo ordenó el juzgado de primera instancia.

42. Por otra parte, tampoco era necesario que la parte ejecutante identificara las cuentas bancarias sobre las cuales debía recaer el embargo, por cuanto, como se vio, ello no es requisito legal y es suficiente con que se mencionen las entidades financieras en las que la parte ejecutada puede llegar a tener productos bancarios, carga que sí cumplió la parte ejecutante.

43. Además, el hecho que el auto no haya identificado numéricamente las cuentas bancarias que serían objeto de embargo no representa un problema, en vista del tope que fija la propia providencia judicial (\$ 14'000.000).

44. Finalmente, el argumento relacionado con que el pago estaba a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional corresponde a un aspecto más sustancial de la ejecución. En todo caso, se destaca que la sentencia base de recaudo impuso la obligación fue al municipio (hoy distrito) de Santiago de Cali.

En mérito de lo expuesto, la Sala

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 3 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado 16 Administrativo de Cali, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por estado.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, **DEVOLVER** la actuación al juzgado de origen, previa anotación en Samai.

Radicación: 76001-33-33-016-2020-00037-01
Medio de control: Ejecutivo
Demandante: Mariela Capote Valencia
Demandado: Distrito de Santiago de Cali
Resuelve apelación contra auto que decretó medida cautelar

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente por Samai)
PATRICIA FEUILLET PALOMARES

(Firmado electrónicamente por Samai)
LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

(Firmado electrónicamente por Samai)
ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT